



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Patricia Elena Hernández Ríos
DEMANDADO	Colfondos S.A. y Ministerio de Hacienda y Crédito Público
RADICADO	05-001-31-05-019-2019-00328-02
TEMA	Apelación costas procesales
DECISIÓN	Confirma auto recurrido.

El veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, dentro del proceso ordinario, promovido por **PATRICIA ELENA HERNÁNDEZ RÍOS** contra **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍA** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, procede a resolver lo pertinente.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia interlocutoria, según acta de discusión de proyectos **Nº 033**, aprobada por los integrantes de la Sala.

Llegó el auto a este Tribunal para conocer del recurso de apelación formulado por la apoderada de la demandante, contra la decisión tomada por el Juzgado Decimonoveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante el auto del 25 de noviembre de 2022, por medio del cual se liquidaron las costas procesales de manera concentrada por un valor **\$1'140.000**, a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en primera instancia, y de **\$1'000.000**, a cargo de COLFONDOS S.A. en segunda instancia, y en favor de la parte actora.

- **APELACIÓN:**

Para la sustentación del recurso la apoderada de la parte demandante considera que al no detallarse de manera expresa el valor de las pretensiones económicas, ya que son de índole declarativo y de obligación de hacer, al salir exitosas, se debió aplicar el numeral 1º del artículo 5º del acuerdo PSAA16-

10554 del 5 de agosto de 2016, fijándose las agencias en derecho entre uno y 10 salarios mínimos. De igual forma, se debió tener en cuenta la gestión realizada por el apoderado, la cual fue de suma diligencia, asistiendo a todas las audiencias; por tal razón, la fijación de las agencias en derecho, debió ser de 3 salarios mínimos legales mensuales y no de \$1'140.000, como se estableció en primera instancia.

- **ALEGATOS:**

Una vez transcurrido el término para alegar, se tiene que ninguna de las partes, presentó alegatos de conclusión al respecto.

Al respecto el Tribunal hace las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para resolver la inconformidad presentada, lo primero que debe señalarse, es que las **expensas judiciales** – entendidas éstas como los gastos necesarios para el trámite del juicio - (honorarios de peritos, copias, diligencias que deban llevarse a cabo por fuera del Despacho Judicial) y las **agencias en derecho** – dinero que se adeuda por los gastos en que incurrió la parte triunfante de un proceso con la contratación del profesional que defendió sus intereses – (honorarios), hacen parte integrante de las **costas procesales**, lo cual constituyen en erogaciones que debe cubrir la parte vencida en el proceso.

Igualmente, las agencias en derecho *“representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses”* y es *“el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393 – 3 – del Código de Procedimiento Civil... Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado...”*¹ (Negrilla de la Sala).

¹ Sentencia de la Corte Constitucional C-539 del 28 de julio de 1999

Por su parte, el artículo 366 -4- del Código General del Proceso, indica que para la fijación de agencias en derecho se consultará las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Determina, igualmente, que si “...éstas solamente establecen un mínimo, o éste o un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de esas tarifas...”

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, no hay duda alguna, que el caso de autos debe resolverse bajo los parámetros del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el cual en artículo 5°, numeral 1°, consagra de la liquidación en los procesos declarativos en general, disponiendo:

“... En primera instancia.

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

- (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.*
- (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.*

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V... (Negrilla de la Sala)

Ahora, respecto a las agencias en derecho liquidadas por el juez, debe señalarse que es perfectamente viable tasarlas conforme a las pautas que trae la “tarifa de honorarios del Consejo Superior de la Judicatura”, sin desconocerse que la normatividad aludida, establece criterios de carácter **cualitativo** y **cuantitativo** para que el juzgador fije las agencias en derecho, más no se deduce de la interpretación de tales disposiciones que éstas, de manera automática, impongan el valor de dicha erogación, pues simplemente orientan al juez para que en uso de su discrecionalidad fije un monto que considere prudente y proporcional con el valor de las condenas por él reconocidas, el tipo de proceso, y la duración y calidad de la gestión que realizó el apoderado en el transcurso del proceso, teniendo como límite el tope máximo fijado por la ley, pero sin que ello signifique que de manera necesaria, que el fallador esté condicionado a fijar como agencias el máximo legal como lo pretende el recurrente.

Descendiendo al **presente caso**, es importante tener claro, que se trató de un proceso ordinario laboral en donde se pretendía que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitiera con destino a COLFONDOS, el bono pensional por los aportes efectuados al ISS hoy Colpensiones, en donde claramente se impuso una obligación no periódica y de hacer; pues bien, no desconoce la Sala, que la apoderada de la parte demandante adelantó todas las gestiones necesarias para el reconocimiento de las pretensiones, las cuales se circunscribieron a la presentación de la demanda el 5 de junio de 2019 y al recaudo de la prueba documental.

Por lo anterior, encuentra esta judicatura que, si bien la gestión realizada por el apoderado de la parte actora en el proceso de la referencia fue diligente, asistiendo a las respectivas audiencias para resolver lo relacionado con el bono pensional, no se puede pasar por alto, que se trata de un proceso que no gozaba de mayor desgaste procesal para la parte actora, como tampoco mayor intervención jurídica, y al estar tasadas dentro del margen respectivo las agencias en derecho, conforme al acuerdo ya mencionado, esta Sala considera pertinente **CONFIRMAR** el valor impuesto por el juez de la primera instancia.

En conclusión y sin necesidad de más consideraciones al respecto, se **CONFIRMARÁ** el auto recurrido por las razones que se han dejado consignadas.

Sin costas en el recurso.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto recurrido, que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

SEGUNDO: Sin costas en el recurso.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 031 del 23 de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>